

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



*“Al servicio de la justicia y de la paz social”*

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	SERVIDUMBRE
DEMANDANTE	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P
DEMANDADO	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS y PERSONAS INDETERMINADAS
INSTANCIA	SEGUNDA -APELACIÓN AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 002 2022 00444 01
	INTERNO 2023-123
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 102
TEMAS	EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA. INADMISIÓN Y RECHAZO.
DECISIÓN	CONFIRMA
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

**Medellín, treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023).**

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, frente al auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín el día 23 de enero de 2023 mediante el cual dispuso el rechazo de la demanda de servidumbre formulada por INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. (Archivo digital 06. Primera Instancia).

**I. ANTECEDENTES**

Actuando a través de apoderado judicial, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., presentó demanda en contra de la Agencia Nacional de Tierras y las personas indeterminadas que sean titulares del derecho real de domino del predio: *“denominado “LOS TORMENTOS”, que se encuentra ubicado en la vereda “PARAJE GARUPAL” en jurisdicción del municipio de EL COPEY – CESAR”.*

Como pretensiones solicita imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica a favor de la demandante para el proyecto Copey - Cuestecitas 500kV y Copey - Fundación 220kV (Archivo digital 01. Primera Instancia)

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, Despacho que mediante auto del 19 de diciembre de 2022 dispuso su inadmisión (Archivo digital 03. Primera Instancia), exigiendo, los siguientes requisitos:

*“1. Aportará el poder para actuar en el único formato autorizado por el Consejo Superior de la Judicatura -PDF-, pues, al allegarse en formato Outlook no puede esta Judicatura tener acceso al mismo.*

*2. Indica la parte actora en el acápite de “competencia” que no cuenta con el avalúo catastral del predio objeto de servidumbre ni de ningún medio para conocer su valor, pero que conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 15 del CGP que reza: “Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil”; esta oficina judicial es competente para conocer de esta demanda.*

*Al respecto, habrá de indicársele que este asunto se tramita por el procedimiento especial regulado en la Ley 56 de 1981, reglamentado parcialmente por el Decreto 2580 de 1985; donde se indica como requisito de la demanda la presentación del avalúo catastral del inmueble, de cuyo valor partirá la entidad demandante para estimar la indemnización por perjuicios que debe cancelar, que en este caso fue por la suma de \$1.049.101,00, según se desprende del libelo.*

*Adicional a ello, la regla general de competencia aplica únicamente para aquellos asuntos que en efecto no estén asignados a ninguna otra especialidad, lo cual en este caso no se acomoda a ello, puesto que por determinación legal, los jueces civiles son los competentes para conocer de estos asuntos, pero atendiendo a la cuantía se radica la competencia en los juzgados civiles municipales o del circuito.*

*Por lo anterior, no es aplicable el argumento esbozado por el togado de la parte demandante para no aportarlo”.*

Dentro del término concedido para la subsanación, el apoderado de la parte demandante, a través de correo electrónico remitió escrito pretendiendo cumplir las exigencias realizadas por el Despacho, (Archivo digital 06. Primera Instancia), anexando el poder en formato pdf, pero no arrimó el avalúo catastral, indicando que el predio no cuenta con una cédula catastral o un folio de matrícula que lo identifique, información sin la cual es imposible que exista un documento que certifique el valor catastral de éste, señalando entonces imposibilidad para aportar el documento requerido y solicitando se tenga en cuenta el carácter especial del proceso que se pretende adelantar.

En providencia del 23 de enero de 2023 (Archivo digital 06. Primera Instancia), el juzgado de primera instancia decidió rechazar la demandada porque no se

logró subsanar lo requerido, como quiera que no se logró determinar el valor catastral del predio sirviente y en consecuencia la cuantía.

## **II. LA IMPUGNACIÓN.**

Frente al anterior proveído la parte demandante a través de su apoderado judicial, formuló recurso de reposición y en subsidio apelación argumentando que, para rechazar la demanda el juzgado expresa como primer planteamiento que, para establecer la indemnización la parte demandante tuvo que tener en cuenta el avalúo del predio y por ello no se entiende la imposibilidad de obtener el avalúo catastral, lo que no es cierto porque el avalúo catastral no es determinante para el cálculo de la indemnización, sino, el daño causado sobre el predio con la imposición del gravamen, para cuyo computo tienen otros elementos probatorios; que el segundo planteamiento del *a quo* refiere a que los jueces del circuito no tienen competencia residual en asuntos donde la competencia se determina por la cuantía, el que tampoco comparte, porque el numeral 7 del artículo 26 de C.G.P. no regula los casos en los cuales los predios no cuentan con información catastral y, ante el vacío de la norma, se hace necesario acudir a la cláusula general de competencia; máxime que no se puede desconocer la realidad catastral del país y el derecho al acceso a la administración de justicia, más relevante en asuntos encaminados a la prestación de un servicio público esencial (Archivo digital 07. Primera Instancia).

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, decidió no reponer y concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo (Archivo digital 08. Primera Instancia).

El expediente arribó a esta Corporación y fue repartido a este Despacho el 30 de mayo del año en curso, siendo procedente resolver de plano conforme establece el artículo 326 del Código General del Proceso.

## **III. CONSIDERACIONES**

### **1. DEL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.**

A fin de garantizar la concurrencia de los presupuestos procesales y así evitar sentencias inhibitorias y nulidades que afecten la validez del trámite, tiene

diseñado el estatuto procesal civil una actuación determinante, misma que refiere al estudio de admisibilidad de la demanda y funge como el primer control de legalidad del ruego de tutela judicial. Para el Juez dicha actuación comporta el ejercicio de un deber-poder que puede dar lugar a la admisión de la causa, a su inadmisión o a su rechazo.

Tanto la inadmisión como el rechazo tienen en común la no aceptación inicial de la demanda; no obstante, ambas figuras difieren ostensiblemente en sus efectos dado que la primera comporta el aplazamiento de la aprobación de libelo genitor, previa concesión de oportunidad para la subsanación de ciertos defectos; mientras que el rechazo supone el *definitivo* desprendimiento de la causa por parte de la autoridad judicial destinataria. Por supuesto que el rechazo puede estar precedido de la inadmisión de la demanda.

Sobre la materia que se viene destacando prevé el artículo 90 del Código General del Proceso:

Admisión, Inadmisión y Rechazo de la Demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante.

El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose.

Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda solo en los siguientes casos:

- 1. Cuando no reúna los requisitos formales.**
2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.
3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.
4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.
5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.
6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.
7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término

de cinco (5) días, so pena de rechazo. Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza.

Los recursos contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que negó su admisión. La apelación se concederá en el efecto suspensivo y se resolverá de plano.

En todo caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, deberá notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que rechace la demanda. Si vencido dicho término no ha sido notificado el auto respectivo, el término señalado en el artículo 121 para efectos de la pérdida de competencia se computará desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda.

Las demandas que sean rechazadas no se tendrán en cuenta como ingresos al juzgado, ni como egresos para efectos de la calificación de desempeño del juez. Semanalmente el juez remitirá a la oficina de reparto una relación de las demandas rechazadas, para su respectiva compensación en el reparto siguiente.

Parágrafo Primero. La existencia de pacto arbitral no da lugar a inadmisión o rechazo de la demanda, pero provocará la terminación del proceso cuando se declare probada la excepción previa respectiva.

Parágrafo Segundo. Cuando se trate de la causa prevista por el numeral 4 el juez lo remitirá al defensor de incapaces, para que le brinden la asesoría; si esta entidad comprueba que la persona no está en condiciones de sufragar un abogado, le nombrará uno de oficio. (Negrillas fuera del texto original)

Importa igualmente destacar que, con los mismos fines de saneamiento y eficacia del proceso, el referido Estatuto Procesal contempla en su artículo 82 el contenido de toda demanda, enunciando en 11 numerales los requisitos mínimos de forma que debe contener la misma, para que permita el impulso del proceso que conlleve luego a la posibilidad de proferir una decisión que estudie el fondo del asunto en la demanda contenido, el mencionado artículo es del siguiente tenor literal:

Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:

1. La designación del juez a quien se dirija.
2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).
3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.
5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.

7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.

8. Los fundamentos de derecho.

**9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.**

10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.

11. Los demás que exija la ley.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando se desconozca el domicilio del demandado o el de su representante legal, o el lugar donde estos recibirán notificaciones, se deberá expresar esa circunstancia.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las demandas que se presenten en mensaje de datos no requerirán de la firma digital definida por la Ley 527 de 1999. En estos casos, bastará que el suscriptor se identifique con su nombre y documento de identificación en el mensaje de datos. (Negrillas fuera del texto original)

## **2. CASO CONCRETO.**

En el presente caso, como se detalló en la parte expositiva, acontece que, de los diferentes requisitos exigidos para la admisión de la demanda se encontraron irregularidades que dieron lugar a la inadmisión de la misma, de los cuales sólo fue echado de menos finalmente, el relacionado con la determinación de la cuantía, que, según concluyó el *A Quo*, no se logró subsanar, procediendo entonces al rechazo de la demanda, al considerar el juez de primer grado que en los procesos de servidumbre como el presente, es necesario aportar el avalúo catastral del inmueble objeto de litigio para determinar la cuantía, por tratarse de asuntos donde la competencia puede recaer en el juez civil municipal o en el juez civil del circuito, de acuerdo a la cuantía que se establezca con el valor catastral del predio.

De modo pues que corresponde a este Despacho establecer si en este caso concreto era necesaria la determinación de la cuantía como requisito para la admisión de la demanda, así como la presentación del avalúo catastral del inmueble objeto de servidumbre según adujo el *a quo*, o si, por el contrario, le asiste razón a la parte recurrente al señalar que la falta de avalúo catastral del predio conlleva a que la demanda deba ser imperiosamente admitida.

El artículo 25 del Código General del Proceso establece que: “*Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía*”.

Y el artículo 26 ibídem regula la forma en que se determina la cuantía así:

- “1. Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentación.*
- 2. En los procesos de deslinde y amojonamiento, por el avalúo catastral del inmueble en poder del demandante.*
- 3. En los procesos de pertenencia, los de saneamiento de la titulación y los demás que versen sobre el dominio o la posesión de bienes, por el avalúo catastral de estos.*
- 4. En los procesos divisorios que versen sobre bienes inmuebles por el valor del avalúo catastral y cuando versen sobre bienes muebles por el valor de los bienes objeto de la partición o venta.*
- 5. En los procesos de sucesión, por el valor de los bienes relictos, que en el caso de los inmuebles será el avalúo catastral.*
- 6. En los procesos de tenencia por arrendamiento, por el valor actual de la renta durante el término pactado inicialmente en el contrato, y si fuere a plazo indefinido por el valor de la renta de los doce (12) meses anteriores a la presentación de la demanda. Cuando la renta deba pagarse con los frutos naturales del bien arrendado, por el valor de aquellos en los últimos doce (12) meses. En los demás procesos de tenencia la cuantía se determinará por el valor de los bienes, que en el caso de los inmuebles será el avalúo catastral.*
- 7. En los procesos de servidumbres, por el avalúo catastral del predio sirviente.”** (Resaltado intencional).

De las normas en cita se concluye que, en los procesos de servidumbre, para establecer la cuantía es fundamental para determinar la competencia y que, ello se realiza con el valor catastral del predio sirviente, esto es, del predio al cual se pretende imponer servidumbre, siendo imperioso entonces que la parte demandante, afirme de forma sustentada el valor catastral del bien.

Ahora, analizado el libelo genitor se evidencia que, desde el principio, en el acápite de la cuantía, la parte actora omite señalar si el litigio se trata de uno de mínima, menor o mayor cuantía, mucho menos el valor catastral sustentado del bien, señalando en dicho punto que el predio objeto de servidumbre no cuenta con avalúo catastral y que esa situación al no estar regulada en el Código General del Proceso implica que deba ser conocido por el juez de circuito en virtud de la cláusula general de competencia y, al pretender subsanar la demanda dice que realizó gestiones a fin de recolectar información y documentación en las diferentes bases de datos a las que tiene acceso y peticiones a diferentes entidades, pero que de acuerdo a la información que le brindaron los ocupantes del predio y el IGAC, el inmueble carece de antecedentes catastrales, siendo imposible obtener el avalúo catastral solicitado por el juzgado.

De lo anterior se desprende claramente que la parte demandante no cumplió con el requisito de determinar la cuantía, pues ni siquiera afirmó fundadamente cuál era el valor catastral del predio al cual pretende se le imponga la servidumbre pretendiendo ampararse en una imposibilidad que no demostró. Nótese que señala que realizó gestiones para obtener el avalúo catastral, pero no arrimó prueba alguna, ni en la demanda, ni en el escrito de subsanación, ni en el escrito contentivo de los recursos, que dé cuenta de esas diligencias efectuadas, en tanto no presentó las consultas en las bases de datos, ni las solicitudes realizadas al IGAC, mucho menos dijo haber realizado, ni presentó tampoco, petición alguna dirigida a la autoridad catastral en la que indagara por el valor catastral del predio objeto de discusión.

No desconoce este Despacho que los procesos de servidumbre de conducción de energía eléctrica son de interés público, pero ello no puede implicar que se deban dejar de lado las normas de competencia cuyo desconocimiento conlleva a la configuración de nulidades, como tampoco puede pasar inadvertido que la entidad demandante es una profesional en la materia de energía eléctrica, con amplia experiencia en el tema de servidumbres de este tipo, la cual debe efectuar necesariamente labores previas a la iniciación del proceso encaminadas a obtener la información y documentación necesaria para acudir al litigio, siendo totalmente inadecuado incluso, que indique que fueron los ocupantes del predio quienes le señalaron que el mismo no tenía cédula catastral y no demuestre haber efectuado las conductas pertinentes para constatar esa información con las autoridades administrativas pertinentes.

Preciso resulta indicar para finalizar que, aunque al igual que el recurrente, este Despacho no comparte el planteamiento del *a quo* donde da a entender que el avalúo catastral es la base para establecer la indemnización, si se acompaña la conclusión de inexistencia de imposibilidad, o por lo menos, demostración de imposibilidad, para obtener el avalúo catastral y de la necesidad de éste último para determinar la cuantía y la competencia del proceso, siendo finalmente la decisión a adoptar entonces la confirmación de la decisión de primer grado.

### 3. COLOFÓN Y COSTAS.

Como en definitiva no se cumplió con el requisito relativo a la determinación de la cuantía, exigido en el auto inadmisorio de la causa, procedía el rechazo de la presente demanda y, por ende, la **CONFIRMACIÓN** en esta instancia del



auto apelado.

No obstante, la resolución de la instancia ser negativa para la parte recurrente, no habrá lugar a imponer condena en costas, toda vez que no se causaron. Lo anterior atendiendo la regla 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

#### **IV. RESUELVE**

**PRIMERO. CONFIRMAR** el auto de fecha 23 de enero de 2023 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, mediante el cual se dispuso el rechazo de la demanda de la referencia, por las razones expuestas.

**SEGUNDO. ABSTENERSE** de imponer condena en costas.

#### **NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE**

  
**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**  
Magistrada

*(Firma escaneada conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)*